



ANA LUCÍA ARIAS GIRALDO

ABOGADA -

Derecho Administrativo y disciplinario

Carrera 5 N° 25 A -31 - Tuluá Valle

Celular: 3108453127 Email: ariasgiraldoanalucia@hotmail.com

2

226 de febrero de 2016

Señores:

JUZGADO ADMINISTRATIVO (REPARTO)

Buga Valle

ASUNTO: DEMANDA DE REPARACION DIRECTA.

DEMANDANTE: MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO

DEMANDADOS: INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) representado legalmente por el Director General Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON y al director de la Cárcel de Tuluá, doctor GONZALO RIVERA DUQUE. O quien hagan sus veces en el momento de la notificación.

Atento saludo:

ANA LUCIA ARIAS GIRALDO, mayor de edad, con domicilio en la ciudad de Tuluá, identificada con la cédula de ciudadanía No. 66.710.213 de Tuluá, abogada titulada, portadora de la tarjeta profesional No 87842 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de apoderada especial del Señor, **MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO**, identificado con la cédula de ciudadanía numero 7.550.937 expedida en Armenia Quindío, condenado por el delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS, recluso en la Cárcel de Tuluá Valle en el patio N° 6, según mandato adjunto, en ejercicio de la acción de reparación directa que consagra el artículo 140 del C.P.A de conformidad con lo establecido en el numeral 1° del artículo 161 el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, el cual regula el medio de control de REPARACIÓN DIRECTA, DEMANDO AL DIRECTOR GENERAL BRIGADIER GENERAL JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC), Y AL DIRECTOR DE LA CÁRCEL DE TULUÁ, DOCTOR GONZALO RIVERA DUQUE, o quien los represente o haga sus veces para que previo los tramites contemplados en el Código Contencioso administrativo, Título III, artículo 140 y con citación y audiencia del señor agente del ministerio público se haga las siguientes...

DECLARACIONES Y CONDENAS:

PRIMERA, que se declare que EL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) representado legalmente por el Director General Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON y el director de la Cárcel de Tuluá, doctor GONZALO RIVERA DUQUE, o quien hagan sus veces en el momento de la notificación, son administrativamente responsables por omisión de los perjuicios físicos y morales causados al Señor, **MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.550.937 expedida en Armenia Quindío, por falla del servicio que condujo a la pérdida del ojo derecho de mi cliente el señor **MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO**.

SEGUNDA. Condenar, en consecuencia, a la Nación Colombiana - INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) -, representado legalmente por el Director General Brigadier General JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON y al director de la Cárcel de Tuluá, doctor GONZALO RIVERA DUQUE, o quien hagan sus veces en el momento de la notificación, como reparación del daño ocasionado, a pagar al señor **MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO** a través de la suscrita que representa legalmente sus derechos, los perjuicios de orden moral, subjetivos y objetivos, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTOS PESOS MDA/CTE. (\$248.719.100)** o conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica.

TERCERA. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 195 del C.P.A., "Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorios a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este Código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un

"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera"

Horacio.



ANA LUCÍA ARIAS GIRALDO

ABOGADA -

Derecho Administrativo y disciplinario

Carrera 5 N° 25 A -31 - Tuluá Valle

Celular: 3108453127 Email: ariasgiraldoanalucia@hotmail.com

3

interés moratoria a la tasa comercial" desde la fecha de ocurrencia de los hechos, hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

CUARTA. La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 192 del C.P.A.

HECHOS y OMISIONES

El señor, MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO, identificado con la cédula de ciudadanía numero 7.550.937 expedida en Armenia Quindío, fue detenido por la Fiscalía 30 seccional de Tuluá el 13 de marzo de 2013, por el presunto delito de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS, recluido en la Cárcel de Tuluá Valle en el patio N° 6, proceso radicado con el numero 768343104002 2013-00089 -00, sitio en el cual permanece hasta el momento. (Folio 46 y 47 frente)

Mi poderdante fue punzado por un insecto (chinche) en su ojo derecho en el mes de junio de 2013 cuando dormía en su celda del patio número 6, su ojo presentó enrojecimiento, situación que le produjo mucho dolor, fue atendido por el médico adscrito a la cárcel, el cual le recetó Timolol y prenizolona y diferentes tipos de gotas para calmar el dolor y la infección.

Dos meses más tarde, ante el intenso dolor y enrojecimiento que seguía presentando mi cliente, fue trasladado al médico el 02 de agosto de 2013, el cual fue diagnosticado con conjuntivitis aguda, no especificada, atendido en la clínica María Ángel de la ciudad de Tuluá, allí permaneció hasta el día siguiente (folio 25 y 26 frente)

El 09 de agosto de 2013, es nuevamente llevado a la clínica María Ángel de la ciudad de Tuluá, pero no fue posible la atención por congestión en el servicio, autorizándose por parte de "la doctora Sánchez" adscrita a la Clínica María ángel de Tuluá que se hiciera nuevamente consulta para que fuera valorado por oftalmología con urgencia al día siguiente, es decir el día 10 de agosto de 2013. (Folio 28 frentes)

El día 10 de agosto de 2013, mi cliente fue atendido por el doctor WALTER RODRIGO ALVARADO RUIZ, el cual se desempeña como oftalmólogo en la Clínica María ángel de la ciudad de Tuluá, el cual al realizar el examen físico al señor MANUEL RODRIGO, dictamino un glaucoma, y lo remitió de manera "urgente" al GLAUCOMATOLOGO, advirtiéndole que era urgente esta remisión, era necesario que el paciente iniciara el tratamiento de inmediato para evitar que avanzara y pudiese perder la vista, en la historia clínica se puede observar "urgente" (folios 29 al 33 frente)

¿Pero qué es un Glaucoma?

"Enfermedad del ojo caracterizada por un aumento de la presión dentro del globo ocular que causa un daño progresivo en la retina y a veces pérdida de la visión".

Por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina.

"Sin el tratamiento apropiado, el glaucoma puede llevar a la ceguera. La buena noticia es que con exámenes oftalmológicos periódicos, la detección temprana y el tratamiento puede preservarse la vista."

Pese a que el doctor WALTER RODRIGO ALVARADO RUIZ, desde el 10 de agosto de 2013, había ordenado cita con el GLAUCOMATOLOGO, de carácter "Urgente" solo hasta el 8 de enero de 2014, decir cinco (5) meses después, ante la insistencia del interno y la presión de la familia, nuevamente es llevado por el INPEC Tuluá, al médico, pero no al GLAUCOMATOLOGO, no, no, no, fue llevado nuevamente pero ante el doctor WALTER RODRIGO ALVARADO RUIZ,

"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera"

Horacio.



ANA LUCÍA ARIAS GIRALDO

ABOGADA -

Derecho Administrativo y disciplinario

Carrera 5 N° 25 A -31 - Tuluá Valle

Celular: 3108453127 Email: ariasgiraldoanalucia@hotmail.com

4

oftalmólogo de la clínica María Ángel el cual había ya señalado que era urgente pasar mi poderdante con el GLAUCOMATOLOGO.(folio 33 frente)

El 8 de enero de 2014, El doctor WALTER RODRIGO ALVARADO RUIZ, vuelve y ordena no como urgente sino como "prioritario" la valoración con el GLAUCOMATOLOGO, insiste el médico en la necesidad de tal valoración, porque para él era prioritario que el paciente iniciara el tratamiento y no fuera a perder el ojo, situación que finalmente ocurrió pues la tardanza del IMPEC Tuluá, en tomar la decisión de traslado permitió que hubiese un daño irreparable. (Folio 34 al 36 frentes)

Después que el médico insistiera y ordenara en dos ocasiones la remisión del paciente a una cita con el GLAUCOMATOLOGO, un poco menos de tres meses, más exactamente el 31 de marzo de 2014, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, expide la boleta medica de Remisión al Institutos de Ciegos y Sordos en Cali para llevar allí la consulta, (folio 37 frente)

Lamentablemente ese 31 de marzo de 2014 cuando por fin expidió la boleta para trasladarlo a la ciudad de Cali, al Instituto de Ciegos y Sordos y ser atendido en Instituto, ya no había nada que hacer, pues mi cliente fue diagnosticado con pérdida de La visión en su ojo derecho, lo más triste de todo es que el ángulo de su ojo izquierdo comenzaba también a cerrarse (folios 38 al 45 frente)


Desde junio del 2013 cuando mi cliente sufrió la picadura del chinche y que sirvió de alerta para lo que estaba pasando, al 31 de marzo de 2014, fecha en la cual fue atendido por el Instituto de Ciegos y Sordos del Valle del Cauca y donde le diagnosticaron pérdida total de su ojo derecho, corrieron nueve largos meses, donde mi cliente tuvo que soportar el dolor, el no poder dormir, la negligencia, la violación de sus derechos constitucionales a la salud, a ser tratado dignamente, la incertidumbre de lo que iba a pasar con su salud.

¡Nueve (9) meses para que fuera atendido el paciente por un especialista!, esto lo consideramos un trato inhumano, es que la enfermedad no se la invento mi poderdante, el INPEC es responsable de lo que le suceda al interno, mi cliente estaba y está bajo su cuidado y protección, el INPEC era el que tenía la autoridad para llevar al señor MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO al médico, él era el que tenía la competencia de decidir que come, a qué hora duerme, que medicamentos puede o no tomar, quien lo visita, el INPEC decidía, la fecha, el lugar y la hora en que trasladaba al interno, el INPEC, tiene la autoridad total sobre los presos, porque mi poderdante estaba y está encerrado, detenido, privado de su libertad, sin derecho a protestar.

El INPEC. Incumplió el manual de funciones, señalado en la Resolución número 005979 de 30 de diciembre del 2011 "Por la cual se modifica el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales para los empleos de los Directivo y Asesor de la planta de empleos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC" Funciones: "Prestar los servicios de atención integral, rehabilitación y tratamiento penitenciario a la población privada de la libertad".

El INPEC es responsable porque con su omisión, produjo un daño cierto, real, anormal y antijurídico, como fue la pérdida del ojo derecho de mi cliente, mi cliente ya tiene suficiente con estar encerrado, le correspondía al Estado a través del INPEC, ser diligente, pues se trataba de la salud de mi cliente, fue negligente cuando con su omisión causó un daño de esta magnitud a mi cliente y éste no tiene por qué soportar este daño.

MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO, ingreso a la cárcel en buenas condiciones de salud, por lo menos si hubiesen sido diligentes con las consultas, que éstas se hubiesen realizado a tiempo, si hubiesen atendido las recomendaciones del médico tratante cuando en un acto desesperado señalo "Urgente" "Prioritario", podría pensarse que la pérdida del ojo era irreversible y no serían señalados como ahora lo hacemos, pero la demora a la que sometieron a mi cliente hizo que cuando se decidieron remitirlo al ESPECIALISTA, lamentablemente ya no se podía hacer nada con su vista, había perdido su ojo derecho Esa demora en la atención, ESA OMISION, es responsabilidad del INPEC, la demora en la atención, desencadeno la pérdida de su ojo derecho.


"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera"

Horacio.



ANA LUCÍA ARIAS GIRALDO

ABOGADA -

Derecho Administrativo y disciplinario

Carrera 5 N° 25 A -31 - Tuluá Valle

Celular: 3108453127 Email: ariasgiraldoanalucia@hotmail.com

Mi cliente estaba sometido a lo que ordenara el INPEC, no es su responsabilidad el no haber sido atendido a tiempo por el médico, tenía que esperar que fuera ellos y solo ellos los que tomaran la decisión de traslado hasta un Centro Hospitalario.

Desde el 25 de noviembre de 2013, la compañera permanente del señor MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO, licenciada JANETH CENAIDA RUSSI SUAREZ, mediante derecho de petición advirtió de lo que estaba sucediendo, en el documento solicitó al director del IMPEC Tuluá, la "atención en salud inmediata y efectiva" en el numeral tercero del derecho de petición, la señora JANETH CENAIDA RUSSI SUAREZ, dijo: (folio 48 y 49 frente)

"TERCERO, Como quiera que el diagnostico medico fue que el paciente padece un glaucoma, diagnóstico del cual me permito anexar copia; mi compañero se encuentra propenso a perder de manera total la visión de su ojo derecho si este problema no es tratado a tiempo y de manera efectiva"

Derecho de petición que nunca fue contestado ni tampoco tenido en cuenta, violando otro derecho constitución enmarcado en el artículo 23 de la constitución nacional, al IMPEC, no le importó la situación del interno, pese a que ya la Corte Constitucional había señalado:

Sentencia No. T-596/92 DERECHOS DEL INTERNO-Responsabilidad del Estado

"Si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se deriva importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el derecho al descanso nocturno, entre otros"

Otra omisión cometida por el INPEC se produjo al ingreso de mi cliente a la cárcel, pues éste jamás fue afiliado por el INPEC al sistema de salud, fue su compañera permanente la que tuvo que diligenciar ante CAFESALUD, el ingreso de éste al sistema, situación que es absolutamente del resorte del INPEC.

Sentencia T-588A/14 - DERECHO A LA SALUD DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Responsabilidad del Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario

El Estado tiene la obligación de utilizar todos los medios necesarios para garantizar la salud en condiciones oportunas, adecuadas, eficientes y continuas, de tal manera que se mantenga la vida del interno en un contexto digno y de calidad. Esta obligación se genera, no sólo porque el Estado es el encargado de la organización, dirección y reglamentación de la salud; sino también surge como consecuencia de que los internos únicamente cuentan con los servicios médicos que ofrece la cárcel a través de la EPS contratada. El Estado, mediante las instituciones penitenciarias y carcelarias, se encuentra bajo la obligación de garantizar, de forma continua y eficaz, el derecho a la salud de los internos. Ello implica que todos los servicios médicos deben prestarse sin interrupciones u obstáculos de carácter administrativo y/o financiero.

"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera"

Horacio.



ANA LUCÍA ARIAS GIRALDO

ABOGADA -

Derecho Administrativo y disciplinario

Carrera 5 N° 25 A -31 - Tuluá Valle

Celular: 3108453127 Email: ariasgiraldoanalucia@hotmail.com

El artículo 90 de la Constitución Nacional, el cual señala: "El estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputados, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas"

El ente público, en el caso sub examine, incurrió en responsabilidad de tipo indirecto que se evidencia en la falla del servicio, en el siguiente aspecto:

El INPEC OMITIO trasladar a tiempo al señor MANUEL RODRIGO, a la consulta que el médico WALTER RODRIGO ALVARADO RUIZ había señalado como urgente para que fuese atendido por el GLAUCOMATOLOGO. Y solo cinco (5) meses después, es remitido pero no al GLAUCOMATOLOGO, sino nuevamente al doctor, WALTER RODRIGO ALVARADO, pese a que su compañera permanente les había enviado derecho de petición y les había suplicado prácticamente que cumplieran con lo recomendado por el médico, WALTER RODRIGO ALVARADO y no les basto la negligencia, sino que se esperaron nuevamente tres (3) meses para cumplir con la orden del médico, cuando el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca determina que ya no se podía hacer nada.

Es incuestionable, entonces, que el daño sufrido por el señor MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO, fue causado por una falla del INPEC, vulnerándose así los derechos del señor MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO, al no protegerlo en su salud, incumpliendo de esta forma los deberes fundamentales consagrados en la Carta Política, la conducta del INPEC, fue tardía y displicente.

Si un estamento del Estado incumple el ordenamiento tutelar de los derechos ciudadanos, es lógico que ello implique para él una serie de obligaciones, que no se vieron acatadas en relación con la víctima y, por ello, no protegió su salud. Estas faltas o fallas cometidas por las personas de derecho público, son las que se deben corregir, porque los agentes del INPEC no procedieron como era su deber haberlo hecho.

Sea suficiente el concepto que antecede para sostener con fundamento, que el hecho dañoso es imputable únicamente al Estado, en cabeza de uno de sus órganos, sin que exista causa exonerativa de responsabilidad porque el daño no se produjo por culpa de la víctima, ni por la ocurrencia de una fuerza mayor o caso fortuito, que sirvieran de fundamento para hablar con certeza del acaecimiento de un hecho imprevisible.

La forma como ocurrió la pérdida del ojo derecho del señor MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO, y las circunstancias de ésta, ubica la responsabilidad, al configurarse los siguientes elementos axiomáticos:

a) El hecho generador de la falla del servicio de la administración, plenamente establecido con los argumentos que anteceden Fue la OMISIÓN.

El INPEC actuó tardíamente, cuando ya no había nada que hacer, no atendió las recomendaciones del médico, tratante, ni las suplicas de la compañera permanente, su conducta omisiva produjo un daño irremediable.

b) El daño cierto, la pérdida del ojo derecho de la víctima, que implicó la lesión del bien en la salud, protegido y tutelado por el derecho constitucional señalado en el artículo 49 de la C.N

c) La relación de causalidad entre la falla del ente público y el daño cierto. Al INPEC le correspondía el traslado del interno al centro de salud, mi cliente no está facultado para tomar la decisión de ir al médico, éste tenía que estar sometido al reglamento del INPEC, solo podía desplazarse cuando éste lo autorizara, la demora en las autorizaciones hizo que mi cliente sufriera el daño irreparable en su ojo derecho.

El INPEC era el que tenía la autoridad para llevar al señor MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO al médico, él era el que tenía la competencia, el INPEC decidía la fecha, el lugar y la hora en que trasladaba al interno, porque éste estaba sin derecho a protestar.

"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera"

Horacio.



7

ANA LUCÍA ARIAS GIRALDO
ABOGADA -
Derecho Administrativo y disciplinario
Carrera 5 N° 25 A -31 - Tuluá Valle
Celular: 3108453127 Email: ariasgiraldoanalucia@hotmail.com

Inequívocamente, la omisión del INPEC fue la causa eficiente del daño sufrido; en el fondo, lo que se evidencia es la relación de causa entre la falla y el daño causado, como se probará fehacientemente.

La jurisprudencia del honorable Consejo de Estado es abundante cuando, al desarrollar los principios atinentes a la responsabilidad pública, ha sentado: "... De ahí que bien puede predicarse que la responsabilidad del Estado se desprende de la obligación que nace para éste de reparar los perjuicios causados, bien sea a la sociedad o a uno de sus miembros, como consecuencia del no cumplimiento, o del defectuoso cumplimiento o tardío cumplimiento de los deberes fundamentales consagrados en la Constitución... Pero, se repite, la responsabilidad estatal surgirá siempre que las autoridades pudiendo y debiendo hacerlo para el caso específico dejen que se desconozcan los derechos a la vida, honra y bienes de las personas residentes en el país por parte de otras personas o cuando el mismo Estado vulnera tales derechos..."

PRUEBAS

Solicito comedidamente que se tengan como pedidas dentro del término de fijación en lista las siguientes pruebas:

1. Solicito se solicite la historia clínica que reposa en la oficina de sanidad del establecimiento carcelario de Tuluá cuyo director es el doctor GONZALO RIVERA DUQUE, pretendo con ello demostrar la fecha en la cual fue atendido mi cliente por la presunta picadura del chinche.
2. Solicito comedidamente la historia clínica que reposa en la clínica María ángel de la ciudad de Tuluá, ubicado en la carrera 40, antigua sede del Instituto de Seguros Sociales, pretendo con ello demostrar la demora en las revisiones y diagnósticos clínicos que tuvo mi poderdante que lo hicieron perder su ojo derecho.
3. Solicito comedidamente la historia clínica que reposa en el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, ubicado en la carrera 38 N° 5B1- 45 de la ciudad de Cali Valle del Cauca, pretendo demostrar la fecha en la cual mi cliente tuvo el diagnóstico de la pérdida de su ojo derecho
4. Oficiar a CAFESALUD E.P.S, ubicada en la Calle 25 38-32, Tuluá, Valle del Cauca. Teléfono. (2) 2253414, para que informe si el señor MANUEL RODRIGO ALZATE ORREGO, fue afiliado a esa entidad a través del Centro Penitenciario INPEC, pretendo demostrar que mi cliente no fue afiliado por el Centro Penitenciario al sistema de salud.

Pruebas documentales:

Me permito acompañar los siguientes documentos:

- 1) Fotocopia de la cedula de mi poderdante
- 2). Constancia de audiencia de conciliación fallida.
- 3) Historia clínica de mi poderdante.
- 4) legalización de captura.
- 5) Derecho de petición de fecha 25 de noviembre de 2013, suscrito por la compañera permanente del demandante JANETH CENAIDA RUSSI SUAREZ

ANEXOS:

Me permito aportar, poder legalmente conferido por el demandante para actuar, g- las Copias de la demanda, con los anexos pertinentes, para el archivo de la Honorable Corporación, y los traslados correspec<ondientes a la entidad demandada y al señor agente del ministerio público.

ESTIMACIÓN RAZONADA

"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera"

Horacio.



1. INDEMNIZACIÓN FUTURA.

Mi cliente tuvo perdida funcional de su ojo derecho, tendrá que vivir con esto por el resto de su vida. Mi cliente cuenta con cuarenta y ocho años de edad y la edad promedio en Colombia para los hombres según el DANE, es de 67 años, teniendo en cuenta el salario mínimo mensual impuesto para el año 2015 y la edad promedio de vida de mi cliente se tiene que debe haber una indemnización futura por un valor de:

DOSCIENTOS DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS UN MIL SEISCIENTOS PESOS MDA/CTE (\$216.501.600)

2. PERJUICIOS MORALES:

Por tratarse de un hecho notorio, mi cliente tasa los daños morales en 50 salarios mínimos mensuales legales, que equivalen a:

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS PESOS (\$32.217.500)

RESUMEN DE PERJUICIOS:

DAÑOS MORALES.....	\$ 32.217.500
INDEMNIZACIÓN FUTURA.....	<u>\$ 216.501.600</u>
TOTAL:	\$248.719.100

Se solicita Por razón de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. En consecuencia, La estimación razonada de la cuantía es en una suma superior a los **DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL CIEN PESOS MDA/CTE. (\$248.719.100)** la cual deberá ser actualizada- indexarse hasta la fecha del pago efectivo o el valor probado en el proceso.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES:

Invoco la Ley 1285 del 22 de enero de 2009, por medio de la cual se reformó la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia), artículo 13 - Invoco los artículos 140 del C.C.A, artículo 90 de la C.N, artículo 164 numeral i del C.C.A., y demás disposiciones concordantes.

Téngase en cuenta las siguientes sentencias:

Sentencia T-588A/14 DERECHOS FUNDAMENTALES DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD-Clasificación en tres grupos: derechos suspendidos, derechos intocables y derechos restringidos o limitados

La Corte ha clasificado los derechos fundamentales de los internos en tres categorías: i) aquellos que pueden ser suspendidos, como consecuencia de la pena impuesta (como la libertad física y la libre locomoción); ii) aquellos que son restringidos debido al vínculo de sujeción del recluso para con el Estado (como derechos al trabajo, a la educación, a la familia, a la intimidad personal); y iii) derechos que se mantienen incólumes o intactos, que no pueden limitarse ni suspenderse a pesar de que el titular se encuentre sometido al encierro, dado a que son inherentes a la naturaleza humana, tales como la vida e integridad personal, la dignidad, la igualdad, la salud y el derecho de petición, entre otros. (director de la Cárcel de Tuluá, doctor GONZALO RIVERA DUQUE El subrayado es mío)

"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera"

Horacio.



ANA LUCÍA ARIAS GIRALDO

ABOGADA -

Derecho Administrativo y disciplinario

Carrera 5 N° 25 A -31 - Tuluá Valle

Celular: 3108453127 Email: ariasgiraldoanalucia@hotmail.com

9

Sentencia T-825/10 - DERECHO A LA SALUD DEL INTERNO-Obligación del Estado de garantizar prestación por intermedio del sistema carcelario en condiciones dignas y sin dilaciones en el servicio integral

La salud como derecho fundamental, regido por los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, debe ser garantizada a toda la población colombiana sin distinción alguna, y en el caso de los reclusos, dicha obligación recae en manos de las autoridades carcelarias. Cuando una persona es privada de su libertad por parte del Estado, este debe asumir la responsabilidad de garantizar al recluso su derecho a la salud a través de las correspondientes autoridades carcelarias, ello en virtud de que, al verse privada de la libertad, la persona no puede hacer uso espontáneo del Sistema General de Seguridad Social en su régimen contributivo o subsidiado. Las autoridades carcelarias tienen la obligación de garantizar a los reclusos no solo una atención médica oportuna y eficiente, sino además, deben asegurar que las prescripciones médicas como exámenes, medicamentos, intervenciones, cirugías, o cualquier otro procedimiento requerido por el interno, sean efectivamente realizados.

JURAMENTO.

Bajo la gravedad de juramento que se entiende prestado con la firma de este documento declaro que no se ha interpuesto demanda alguna por estos mismos hechos.

COMPETENCIA.

De acuerdo al artículo 156 del C.C.A la competencia en los procesos de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Por tanto es usted competente para conocer de esta demanda.

NOTIFICACIONES:

DEMANDADOS:

Director General Brigadier General **JORGE LUIS RAMIREZ ARAGON**, en la calle 26 No. 27-48
PBX 2347474 / 2347262 Bogotá.

Director de la Cárcel de Tuluá, doctor **GONZALO RIVERA DUQUE** - Dirección: calle 29 14-02.
Tuluá Teléfonos: 2242715, 2252679, 2262717.

APODERADA:

En la carrera 5 N° 25 A - 31 Tuluá Valle del Cauca, celular- 3108453127 de acuerdo al Artículo 56. Del código Procedimiento administrativo, solicito comedidamente se me Notifique a la siguiente dirección electrónica: ariasgiraldoanalucia@hotmail.com

Atentamente,

ANA LUCÍA ARIAS GIRALDO
C.C. núm. 66.710.213 de Tuluá
T.P. núm. 87842 del C.S.J.



"La justicia, aunque anda cojeando, rara vez deja de alcanzar al criminal en su carrera"

Horacio.